SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 21 DE MAYO DE 2025

Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª

Recurso núm.: 300/2021
Ponente: D. Francisco Díaz Fraile
Acto impugnado: Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 22 de diciembre de 2020.
Fallo: Desestimatorio

Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil veinticinco.

Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido el **BANCO SANTANDER, S.A.** representado por la Procuradora **SRA. MBR** contra la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, CNMV**, representada por el abogado del Estado, sobre **MULTAS Y SANCIONES**, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sección, D. Francisco Díaz Fraile.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El acto impugnado procede de la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES y es la resolución de fecha de 22-12-2020, que impuso a la hoy parte actora una sanción de multa por importe de 300.000 € por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 284.1 del Real Decreto- Legislativo 4/2015.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso administrativo ante esta Audiencia Nacional, una vez admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda solicitando en el suplico la estimación del recurso.

TERCERO.- Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Abogado del Estado, con entrega del expediente administrativo, para que la contestara y, formalizada dicha contestación, solicitó en el suplico que se desestimaran las pretensiones de la parte recurrente y que se confirmaran los actos impugnados por ser conformes a Derecho.

CUARTO.- Siendo el siguiente trámite el de conclusiones, a través del cual las partes por su orden concretaron sus posiciones y reiteraron sus respectivas pretensiones, quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo el 20-5-2025, en el que efectivamente se votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna una resolución de 22-12-2020 de la CNMV que impuso a la hoy parte actora una sanción de multa por importe de 300.000 € por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 284.1 del Real Decreto-Legislativo 4/2015 al producirse la vulneración del artículo 214 del mismo texto normativo en lo relativo a la información recabada de clientes minoristas personas físicas para la evaluación de la conveniencia.

La demanda termina con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- La parte demandante se acogió al pago voluntario de la multa impuesta prevenido en el artículo 85.2 de la Ley 39/2015, beneficiándose así de la consiguiente reducción del 20% de la sanción.

La clave del actual recurso está en la interpretación del precitado artículo 85.2 de la Ley 39/1985 pues la parte actora entiende que el pago voluntario de la multa implicaba la terminación inmediata por una resolución de archivo del procedimiento sancionador o, en su defecto, esto es, en caso de entenderse que la terminación del procedimiento requería el dictado de una resolución sancionadora, se habrían de haber observado los trámites esenciales del procedimiento sancionador, siendo así que en el caso la Administración continuó la tramitación del expediente

con la petición de informe del Banco de España y dictó una resolución sancionadora sin cumplir los trámites esenciales de un procedimiento sancionador, por lo que en cualquier caso estaríamos en presencia de un supuesto de nulidad de pleno derecho.

El abogado del Estado discrepa de la indicada interpretación del meritado precepto de la parte demandante.

El pleito se ciñe a dilucidar la interpretación que merece el repetido artículo 85.2 de la Ley 39/2015.

TERCERO.- El artículo 85 de la Ley 39/2015 dispone lo siguiente:

<<1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente>>.

El llamado pronto pago es un acto voluntario que conlleva el beneficio de la reducción de la sanción en el correspondiente porcentaje, cuya reducción queda condicionada en su efectividad al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Pero no solo esto. El pago voluntario ha de hacerse en su caso en cualquier momento anterior a la resolución e implica la terminación del procedimiento (salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción), cuya terminación se produce en el estado de tramitación en que se encuentre el procedimiento, lo que implica igualmente la renuncia a los trámites del procedimiento aún no cumplimentados, a lo que es de añadir que dicha terminación no está prevista en la ley que sea por archivo del procedimiento, siendo la forma normal de terminación del procedimiento el dictado de la correspondiente resolución, en este caso una resolución sancionadora, donde se contemplará la correspondiente reducción porcentual de la sanción.

La interpretación que acabamos de exponer es la que más se ajusta a Derecho según los usuales parámetros hermenéuticos, y ello con abstracción del carácter más o menos feliz del tenor literal del precepto.

En el caso el pago voluntario fue seguido tan solo por la petición de informe del Banco de España, que está previsto como un trámite preceptivo por el artículo 273.1.b del Real Decreto-Legislativo 4/2015 para la imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves cuando la entidad infractora sea una entidad de crédito española o una sucursal de una entidad de crédito de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, sin practicar ningún otro trámite pues el pago voluntario implica la terminación del procedimiento sancionador en el estado en que se encuentre, por lo que la resolución sancionadora aparece conforme a Derecho al imponer la

sanción litigiosa en los términos en que lo hizo, sin continuar el procedimiento con los trámites y el contenido que la parte actora echa en falta.

En atención a lo precedentemente expuesto procede la desestimación del actual recurso.

CUARTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de costas a la parte actora (artículo 139.1 de la LJ).

FALLAMOS

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Confirmar la resolución a que se contrae la litis.
- 3) Imponer a la parte actora las costas del proceso.

Esta sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.